

SENTIMIENTOS HACIA LA POLÍTICA: UNA DISCUSIÓN, CON ALGUNA ILUSTRACIÓN EMPÍRICA (1)

Por J. VILAS NOGUEIRA

SUMARIO

VALORACIÓN DEL GRADO DE INFLUENCIA DE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN LA VIDA INDIVIDUAL.—INTERÉS POR LA POLÍTICA Y CONSISTENCIA DE LAS ACTITUDES Y OPINIONES POLÍTICAS.—INTERÉS POR LA POLÍTICA Y SEXO.—CONFIANZA EN EL GOBIERNO Y DEFERENCIA HACIA LA AUTORIDAD.—EL PAPEL DEL CAMBIO DE VALORES.—SENTIMIENTO HACIA LA POLÍTICA Y EDAD.—SENTIMIENTO HACIA LA POLÍTICA Y POSICIONAMIENTO IZQUIERDA/DERECHA.—SENTIMIENTO HACIA LA POLÍTICA Y AFILIACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS.—LEGITIMIDAD: PREFERENCIA POR UN SISTEMA POLÍTICO.—OPINIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA DEMOCRACIA.—LA COMPETENCIA POLÍTICA (DE CIUDADANO).—CONSUMO DE INFORMACIÓN POLÍTICA.—REFERENCIAS.

La mayor parte de los escritores que se han ocupado de estos temas, incluidos los que se ubican disciplinarmente en la ciencia de la política, dan por establecido, como evidencia no necesitada de demostración, que la gente «debe» interesarse por la política, y que la gente «debe» abrigar sentimientos positivos hacia la política. Ciertamente, el ideal participativo está en el corazón de las definiciones tradicionales de la democracia. Pero, si se mira la cuestión de cerca, resulta lógicamente inconsistente atribuir a un cualquier sistema político, y también, por tanto, a la democracia, como único objetivo la maximización de la participación. Este tipo de postulados, muy frecuentes, por lo demás, en los escritos teóricos sobre la democracia,

(1) Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación CICYT SEC94-0975. Agradezco a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y a las personas responsables de esta institución la ayuda prestada.

Las ilustraciones empíricas proceden de una encuesta aplicada en junio de 1998 a una muestra de la población gallega, realizada por el Instituto Sondaxe, de La Coruña.

sólo se explican a partir de una simplista visión idealista (radicalmente escindida de su contexto histórico) de la democracia ateniense.

Más pragmáticamente, puede suponerse que una de las ventajas de un sistema político democrático se centra en las amplias oportunidades de participación que ofrece al común de los ciudadanos; y aquellos que participan en la adopción de las decisiones deberán, lógicamente, estar más satisfechos con ellas, y consiguientemente estarán más apegados al sistema que aquellos que no participan. Según esta hipótesis se produce un intercambio recíprocamente beneficioso entre el individuo y el sistema político. En respuesta a sus *inputs* de influencia, los *outputs* producidos por el sistema serán más beneficiosos para (la mayor parte de) los individuos, lo que, a su vez, a través de esta satisfacción, conduce a un mayor nivel de adhesión al sistema. De este modo, las demás circunstancias iguales, los sistemas políticos democráticos serían, desde el punto de vista de los individuos participantes, más eficaces (los individuos estarían más satisfechos con los resultados del sistema) y más legítimos (los individuos generalmente considerarían el gobierno democrático como el más adecuado entre los posibles).

La postulación, pues, de la participación no sería sólo un ideal normativo —*de gustibus non est disputandum*—, sino que, también, tendría una base pragmática, lo que permitiría emplearlo como parámetro de estimación de hallazgos empíricos. En una sociedad de elites más bien impresionables y oportunistas, juicios de esta naturaleza han servido para escarnecer a la mayoría de la población, que «no sabe» comportarse como sus elites (que, por supuesto, son «demócratas de toda la vida», «galeguistas de toda la vida», «socialistas de toda la vida», etc.) (2).

La hipótesis de que cuanto más participen los individuos en las decisiones, mayor probabilidad haya de que reciban beneficios del sistema es de difícil comprobación. Además, formulada en términos generales, esta hipótesis es lógicamente inconsistente, pues, en la mayor parte de los casos, al menos a plazo corto o medio, los «beneficios» para unos son «perjuicios» para otros. Se puede desconfiar del presupuesto económico liberal de que el mercado permita optimizar el interés general por medio de la prosecución de la maximización de los intereses particulares. Se puede desconfiar de este presupuesto, pero tan pronto interviene la autoridad política ya no hay duda: unos intereses serán sacrificados a otros. Éste es el fundamento de toda autoridad política, y por eso, en sólo aparente paradoja, la justificación de un «interés general» es uno de los grandes temas recurrentes del pensamiento político.

Incluso en la suposición más favorable de que los intereses de los miembros de la sociedad no estuviesen potencialmente enfrentados, y de que la autoridad política no fuese un medio de favorecer a unos respecto de otros, incluso en esta hipótesis tan favorable si la mayor participación en las decisiones favoreciese mayores proba-

(2) Julio Camba ironizó sobre la cantidad de «republicanos de toda la vida» que aparecieron en España después del 14 de abril de 1931. Quizá eran más los demócratas que sufrieron el régimen de Franco, pero no fueron tantos ni tan buenos como para impedir que el General muriese de viejo, tras cuarenta años de franquismo.

bilidades de obtener beneficios, se sigue inexorablemente que los más participantes obtendrán más beneficios que los menos participantes. Porque, además, la participación (la participación *eficaz*, que es la única de la que razonablemente se puede predecir una expectativa de *influencia* y, por consiguiente, de obtención de beneficios) no es sólo una cuestión de gustos o de preferencias; es también, y sobre todo, una cuestión de recursos (desde los psicológicos hasta los económicos, pasando por los educativos, etc.). Esto se comprueba muy bien en ciertos escenarios micropolíticos, poco formalizados, en los que resulta difícil achacar la desigualdad a constricciones institucionales. No es raro que Ud. se encuentre en su asociación de vecinos con enervorizados demócratas, defensores de la máxima participación. Supongamos que no son unos hipócritas, supongamos que creen lo que dicen. Como son unos entusiastas de la participación pertenecen a algún sindicato; probablemente también a algún partido político. No es raro que «preparen» la reunión de la asociación con los secuaces de su misma bandería. En el mejor de los casos no lo harán, pero como son mucho más diestros que los demás en agregar voluntades, en hablar en público, como conocen mejor que los demás las orientaciones políticas de sus vecinos, sus posiciones tiene muchas más probabilidades de imponerse. El «mero» vecino puede tener tanto entusiasmo participativo como ellos (aunque es probable que lo pierda rápidamente), pero difícilmente tendrá igual influencia.

VALORACIÓN DEL GRADO DE INFLUENCIA DE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN LA VIDA INDIVIDUAL

La verdad es que la población, en general, manifiesta algunas opiniones que justifican el postulado de que «debe» interesarse por la política. En una encuesta sobre una muestra representativa de la población gallega, aplicada en junio de 1998, preguntamos: «*en su opinión, ¿las decisiones del Gobierno Central/Gobierno Autonomico/Ayuntamiento, cómo afectan a su bienestar o al de su familia?*». Las respuestas ofrecidas fueron «*mucho*», «*bastante*», o «*poco*».

La mayoría de la población se siente «bastante» afectada por las decisiones de los gobiernos de los distintos niveles territoriales. En general, el sentimiento de afectación es directamente proporcional a la cercanía del nivel de gobierno: más para el Ayuntamiento, algo menos para el gobierno de la Comunidad Autónoma, y algo menos, todavía, para el gobierno central. Respecto de éste son bastantes más los que se sienten poco afectados que los que se sienten muy afectados. También son más los que se sienten «poco» que «muy afectados» por las decisiones del gobierno autonómico. En cambio, son bastantes más los que se sienten «muy afectados» que «poco afectados» por las decisiones del Ayuntamiento. Almond y Verba, 1963, 235, encontraron que, en los cinco países a que se refería su estudio, se daba un nivel sustancialmente más alto de competencia subjetiva en relación al gobierno local que al gobierno nacional. Naturalmente, el grado de afectación subjetiva por las decisiones de los distintos niveles de gobierno no mide la competencia, pero lógicamente se si-

túa en la misma dirección, pues parece normal que el interés por adquirir competencia se conecte con la percepción del grado de interés que para el individuo tenga el ámbito de actuación de la competencia.

Estos resultados no son singulares (ver Justel, 1995), pero ofrecen serios problemas de explicación, pues el grado de afectación percibido por las decisiones de los distintos niveles de gobierno no se corresponde con las tasas medias de participación en las elecciones para esos diferentes niveles de gobierno. Si la percepción de afectación fuese el único elemento determinante de la participación electoral, las tasas más elevadas de participación deberían darse en las elecciones municipales, y las menores en las legislativas generales. Font, 1995, 14-16, ha planteado este problema (o uno muy similar). No da una respuesta concluyente, pero apunta a la influencia movilizadora de los partidos, medios de comunicación y otros actores sociopolíticos relevantes. Aunque esta respuesta, repito, no sea concluyente es la mejor que conozco, y aplicada a nuestro problema revelaría una consecuencia más de las divergencias de percepciones y opiniones entre las elites políticas y la población no de elite.

El grado de sentimiento de afectación se asocia inversamente con el tamaño del hábitat de residencia. El grado más elevado de asociación se da respecto de las decisiones del gobierno central (r de Pearson $-0,21$); para las decisiones del gobierno autonómico es un poco más bajo ($-0,19$), y el menor se da respecto de las decisiones del Ayuntamiento ($-0,13$). Almond y Verba, 1963, afirmaron muy enfáticamente que la nota de la escala de la competencia subjetiva para el gobierno local estaba estrechamente relacionada con la medida de la competencia para el gobierno nacional, lo que sugiere que median dimensiones similares. En nuestro caso, en cambio, la asociación entre la percepción de afectación por las decisiones del gobierno local y del gobierno nacional es sólo de $0,47$, lo que sugiere la influencia de otros factores.

Comparando las medias, se constata que los residentes en municipios de más de 50.000 habitantes (tanto en el tramo de 50.001 a 100.000, como en el de más de 100.000) se sienten significativamente más afectados que la media de la población por las decisiones del gobierno (en los tres niveles: central, autonómico y municipal). Los residentes en municipios de 5.001 a 10.000 habitantes son significativamente los que se sienten menos afectados (también los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes se sienten menos afectados, pero se alejan poco de la media).

Almond y Verba, 1963, 235, en su medición de la competencia política subjetiva, que, como hemos dicho, refieren exclusivamente al gobierno local, encontraron que el tamaño del hábitat de residencia de los encuestados no introducía diferencias significativas. En cambio, nuestra medición de la percepción del grado de afectación por las decisiones de los distintos niveles de gobierno sí las evidencia. Como esta tendencia incluye las decisiones del ayuntamiento, de modo que, también aquí, como en los otros niveles de gobierno la afectación subjetiva es mayor en los residentes en municipios de más de 50.000 habitantes, y menor en los de menos de 10.000, parece lógico concluir que las diferencias dependen más de un condiona-

miento genérico por el tamaño del hábitat de las actitudes generales hacia el gobierno que de una específica modulación de la actitud hacia el Ayuntamiento en función del tamaño del hábitat. El hecho de vivir en un pequeño municipio no implica, en términos generales, una percepción de mayor afectación por las decisiones del gobierno municipal.

El sentimiento de afectación por las decisiones del gobierno correlaciona positivamente con el mayor nivel de estudios. La correlación es algo más elevada para las decisiones del gobierno autonómico (r de Pearson, 16) y algo más débil para las decisiones del Ayuntamiento (,12). Para el gobierno central, el valor de r es de ,13 (por tanto, casi igual que para el Ayuntamiento). Esto parece un indicio más de que las preocupaciones por una identidad política gallega tienen más reflejo en las elites que en las masas. De la utilización de la técnica de residuos ajustados se desprende que en la población sin estudios son relativamente más los que se sienten poco afectados por las decisiones del gobierno, en los tres niveles territoriales. Respecto de las decisiones del gobierno autonómico, la gente sin estudios o con sólo estudios primarios se siente «muy afectada» en proporción significativamente inferior a la media. En el mismo sentido, por el contrario, la gente con estudios universitarios (medios o superiores) se siente «poco afectada» en proporciones inferiores a la media, respecto de las decisiones de gobierno, en los tres niveles territoriales. Finalmente, respecto de las decisiones del ayuntamiento, la gente con estudios universitarios (medios o superiores) se siente «muy afectada» en proporciones significativamente superiores a la media del conjunto de la población.

Esto se puede constatar de modo más sintético comparando las medias. Para las decisiones del gobierno central, el grupo de estudios que se siente más afectado es el de los universitarios medios (1,89 para una media del conjunto de la población de 2,12; 1, significa «muy afectado», y 3 «poco afectado»); también los universitarios superiores se sienten bastante más afectados que la media (2,0). En cambio, los que no tienen estudios se sienten mucho menos afectados que la media (2,34). Para las decisiones del gobierno autonómico se siente significativamente más afectado que la media el grupo con estudios universitarios superiores (1,76 para una media del conjunto de la población de 2,04), y el grupo con estudios universitarios medios (1,82). Y, por el contrario, se sienten significativamente menos afectados que la media la gente sin estudios (2,26). Para las decisiones del Ayuntamiento ocurre casi exactamente lo mismo que para las decisiones del gobierno autonómico (con sólo ligeras variaciones de la media general y de la de cada grupo de estudios). En estos dos casos (gobierno autonómico y ayuntamiento) el grado del sentimiento de afectación ofrece una curva inversa, sin inflexión, al nivel de estudios.

Esta observación podría sugerir que se da una mayor correlación entre el sentimiento de afectación por las decisiones del gobierno autonómico y del ayuntamiento que entre cualquiera de ellos dos y el gobierno central. Sin embargo no es así; la correlación más alta (r de Pearson, 73) se da entre el sentimiento de afectación por las decisiones del gobierno central y del gobierno autonómico. Por su parte, la correlación entre el grado de afectación por las decisiones del gobierno autonómico y del

ayuntamiento es de ,66. En cambio, la correlación entre el grado de afectación por las decisiones del gobierno central y del ayuntamiento es de sólo ,47, una correlación muy baja dada la naturaleza y la formulación de la pregunta. Esto sugiere una apreciación particularmente relevante: en Galicia, al menos, la población tiende a estructurar sus percepciones de afectación por las decisiones de gobierno según un principio de contigüidad de los diferentes niveles de gobierno: los «estatistas», en este sentido, tienden a no sentirse muy afectados por las decisiones del ayuntamiento, y, viceversa, los «localistas» tienden a no sentirse muy afectados por las decisiones del gobierno central.

INTERÉS POR LA POLÍTICA Y CONSISTENCIA DE LAS ACTITUDES Y OPINIONES POLÍTICAS

El interés de los individuos por la política ha sido considerado un factor clave para la comprensión de diversas otras orientaciones políticas. Se ha supuesto que un alto nivel de interés parece que debería ir asociado a una mayor capacidad para comprender qué sucede en política, y que, en este caso, la adopción de opiniones por el individuo iría precedida de alguna reflexión. Las orientaciones políticas de la gente interesada presumiblemente no cambiarán por incidentes menores. En sentido contrario, la gente con un bajo nivel de interés es menos probable que reflexione sobre las cosas políticas. Probablemente, esta gente no emplea mucho tiempo ni esfuerzo en la elaboración de sus opiniones políticas, y así sus orientaciones políticas propenderán a cambiar frecuentemente (Van Deth, 1990). Se ha empleado la etiqueta «no-actitudes» en referencia a la incapacidad de la gente para atribuir significado a estímulos específicos. La confrontación con temas desconocidos o sobre los que uno no ha pensado nunca, en un procedimiento de encuesta, ante preguntas formuladas en una jerga abstracta, más bien técnica, y con una complicada exhibición de tarjetas por el entrevistador puede resultar en no-actitudes.

En esta línea de razonamiento, se puede suponer que la gente que presenta un alto interés por la política estará más familiarizada con los temas de las preguntas de las encuestas que la gente no interesada en política. Es probable que estos últimos sean menos capaces de atribuir significado a los estímulos políticos, dado que estos temas están fuera de su campo visual cotidiano. Los encuestados que no aciertan a captar el significado o la relevancia de las preguntas es probable que produzcan respuestas fortuitas, y que sus orientaciones políticas sean poco persistentes.

Pero, este conjunto de suposiciones no son todas igualmente convincentes. Es perfectamente plausible que la gente interesada en política tenga orientaciones políticas más estables que la gente no interesada. Es igualmente plausible que el mayor interés en política asegure una mejor comprensión de las preguntas de encuesta. Pero, esto no asegura necesariamente una mejor comprensión de la «realidad política». La razón es clara: el «interés» y la estabilidad de las orientaciones políticas parecen estar directamente relacionadas con una visión partidista. Salvo los estudiosos de estas cuestiones (y, aun entre ellos, no precisamente todos), no parece que la gen-

te que se interese por la política, lo haga con una disposición similar a quienes se interesan por las rocas basálticas o por los coleópteros. Resultaría bastante extravagante que los interesados en estos temas mostrasen una decidida, entusiasta preferencia, por una particular formación geológica o por una particular especie zoológica. En cambio, preferencias particulares, no justificadas o de cuestionable justificación, son habituales entre los interesados por la política. Estas preferencias particulares, que abocan a una visión partidista, en un sentido genérico de la expresión, facilitan claramente la estabilidad de las orientaciones políticas (lo que en el lenguaje político trivial se suele llamar «coherencia») pero no menos claramente son un obstáculo para la comprensión de la realidad política. «Fulanito fue muy coherente; fue comunista (u otra cosa cualquiera) desde su juventud hasta su muerte (a avanzada edad)», suele querer decir que a fulanito le importó un bledo la realidad política (a pesar de su muy elevado interés por la política). Su reino era de otro mundo, y era tan inmune a este mundo cuanto que nunca fue contrastado con él. Hay muchos interesados en política que mantienen este tipo de relación con la realidad política.

Nosotros hicimos una pregunta tendente a descubrir el sentimiento, afectivamente cargado, que inspira la política a los ciudadanos. Se preguntó: «*si tuviera que definir con una sola palabra qué le inspira la política, ¿cuál de las siguientes utilizaría?*». Se ofreció una lista cerrada de respuestas: «*entusiasmo/compromiso/interés/indiferencia/aburrimiento/desconfianza/e irritación*», lista que implica una escala ordinal, de mayor a menor sentimiento positivo hacia la política. Las respuestas válidas alcanzaron el 93 por 100 del total. El sentimiento predominante que expresaron los encuestados fue el de desconfianza (algo más del 30 por 100 de las respuestas válidas); también está muy difundido el sentimiento de indiferencia (23 por 100). En cambio, los que expresaron entusiasmo por la política no llegaron al 1 por 100. Más en general, los que declararon sentimientos positivos hacia la política (las tres primeras categorías de respuesta) apenas alcanzaron el 22 por 100.

Nuestra hipótesis es que el interés por la política está mayormente asociado a posiciones de elite. Esta asociación subtiende las asociaciones parciales que eventualmente se pueden descubrir entre el interés por la política y las diversas variables sociodemográficas (hábitat, edad, sexo, nivel de estudios). Todavía Almond y Verba, 1963, encontraron que los individuos del género masculino, con niveles más altos de educación formal, y pertenecientes a familias con un nivel económico más elevado, propendían a situarse en posiciones más altas de la escala de competencia subjetiva como ciudadanos. Hoy, en cambio, es esperable que alguna de estas variables hayan perdido poder explicativo, como consecuencia de los procesos de desarrollo económico, en particular de la industrialización, que tienden a transformar la estructura social en un sentido de mayor homogeneización, generando urbanización, educación de masas, redes organizativas cada vez mayores, igualdad de rentas, etc. Pero no cabe descartar que el status social, que es una especie de precipitado de aquellas variables individualmente consideradas, siga siendo relevante en las orientaciones hacia la política y, en concreto, en el sentimiento hacia la política.

INTERÉS POR LA POLÍTICA Y SEXO

En cuanto al sexo, en Galicia (como en la generalidad de las sociedades de Europa occidental) se ha producido una considerable homogeneización del comportamiento político de hombres y mujeres, de suerte que la variable sexo ha perdido gran parte de su poder explicativo. El mayor abstencionismo electoral y el conservadurismo ideológico que caracterizaban el comportamiento político de las mujeres hace años, son cosas del pasado.

Así, según nuestra encuesta, no hay diferencias por razón de sexo en el comportamiento electoral. En Galicia, no hay un voto específicamente femenino. La asociación entre la variable recuerdo de voto en las últimas elecciones al Parlamento gallego (octubre de 1997) y el sexo no es significativa. No hay diferencia en el grado de participación electoral (declarada). Tampoco la hay respecto de las opciones partidistas elegidas. La imagen tradicional de un voto femenino más conservador que el masculino no encuentra confirmación en la realidad gallega actual. La única diferencia en el comportamiento electoral según el sexo es que las mujeres tienen peor memoria (no recuerdan a quien votaron en mayor proporción que los hombres: residuo ajustado corregido 2,1). Esto parece ser indicativo de un menor interés hacia la política.

En efecto esta diferencia conductual se corresponde con una diferencia actitudinal. En el sentimiento hacia la política siguen subsistiendo algunas diferencias apreciables entre hombres y mujeres. Así lo revela el hecho de que nuestra variable «sentimiento hacia la política» se asocia significativamente con la variable sexo (chi cuadrado de Pearson 26,8). Los hombres muestran sentimientos más favorables hacia la política: entusiasmo (residuo ajustado corregido 2,2), compromiso (2,0) e interés (3,6), y menos desconfianza hacia la política (-2,8).

Volvamos atrás. En términos generales, la razón de la homogeneización del comportamiento electoral entre hombres y mujeres se atribuye básicamente a la profunda transformación social de la situación de la mujer, en particular a su conquista de una avanzada autonomía socioeconómica. Pero, ésta es una explicación muy general. Una de sus particularizaciones es la elevación del nivel de educación formal de las mujeres. Casi todos los trabajos empíricos, realizados en diversos contextos nacionales, muestran que el interés por la política y los comportamientos participativos crecen paralelamente al mayor nivel de estudios. Durante largo tiempo, las jóvenes destinadas ante todo a ser esposas y madres, tuvieron muy pocas oportunidades educativas. En todos los niveles de la educación formal, su presencia era menor que la de los hombres, pero particularmente estaban casi excluidas de los estudios medios (con excepción de algunas profesiones muy «feminizadas», como magisterio, o típicamente «femeninas», como enfermeras y comadronas) y, sobre todo, de los universitarios. Hoy en cambio, las mujeres son, claramente, mayoría, entre los estudiantes universitarios superiores.

En consecuencia, el nivel de estudios no explica ya la diferencia en el grado de interés por la política entre hombres y mujeres. Pero se podría pensar que, dado que

estos desarrollos son recientes, no se reflejan todavía suficientemente en el conjunto de la población (y, consiguientemente, en las muestras que se puedan extraer de ella). Desde luego, la asociación entre nivel de estudios y sexo es aún significativa (chi cuadrado de Pearson 24,1). Pero la modestia del valor del chi cuadrado indica que los procesos de igualación del nivel de educación formal de los dos sexos son más «antiguos» de lo que se suele conceder. Es verdad que son más las mujeres sin estudios o con sólo estudios primarios (residuo ajustado corregido 3,0, y 2,8 respectivamente) y menos las que tienen estudios de EGB o similares (-3,3). Pero, en cambio, en los niveles superiores las diferencias no son significativas.

Si conectamos esta observación con la evidencia de que el nivel de educación formal, independientemente del sexo, se ha elevado mucho en las últimas décadas, sería esperable que aquellas diferencias se presenten en las cohortes de más edad. Si examinamos la relación entre sexo y nivel de estudios, controlando la edad, se observa esta tendencia, pero los datos no son enteramente concluyentes. En concreto, se observa que: 1) en el tramo de 18 a 25 años de edad no hay diferencias relevantes; 2) en el tramo de 26 a 35 años se da una mayor frecuencia relativa de los hombres con estudios de EGB o similares (residuo ajustado corregido 2,1); 3) en el tramo de 36 a 45 años se da una menor frecuencia relativa de hombres con sólo estudios primarios (-2,2); 4) en el tramo de 46 a 55 años se da una menor frecuencia relativa de hombres con sólo estudios primarios (-2,6), y una mayor frecuencia relativa de hombres con estudios de bachillerato o formación profesional (2,0) y universitarios medios (2,5); 5) en el tramo de 56 a 65 años se da una mayor frecuencia de hombres con estudios universitarios superiores (2,3); y 6) en el tramo de más de 65 años se da una menor frecuencia de hombres sin estudios (-2,3) y una mayor frecuencia de hombres con estudios de bachillerato o formación profesional (3,4).

En consecuencia, los datos parecen evidenciar que el progreso hacia la igualación en el nivel de estudio entre hombres y mujeres no excluye diferencias relevantes en los sentimientos de unos y otras hacia la política, que nosotros atribuimos preferentemente a posiciones de elite (que no son función exclusiva del nivel de estudios).

Un segundo factor que se suele invocar para dar cuenta del cambio en el comportamiento electoral de las mujeres es su acceso masivo al mercado de trabajo. Pues bien, en nuestra encuesta aunque se constata una asociación significativa (chi cuadrado 174,5), en general, entre la situación laboral y el comportamiento electoral, no se encuentran evidencias de que el acceso de las mujeres al mercado de trabajo influya en su comportamiento electoral. En efecto, si se toma la categoría «sus labores», típicamente identificativa de las mujeres que no han accedido al mercado de trabajo, lo más relevante es una mayor proporción de «no recuerdo» del voto (residuo ajustado corregido 2,3), indicativa de un menor interés por la política de las amas de casa. En cambio, en las opciones de voto no se encuentran diferencias relevantes. Este hallazgo se sitúa en la misma dirección, de vinculación del interés por la política a posiciones de elite (no hay nada menos elitista que la condición de «ama de casa»).

Un tercer factor se asocia al comportamiento religioso. En términos generales, ciertamente la práctica religiosa se asocia significativamente, de modo importante, al voto (chi cuadrado 210,3). Los católicos practicantes votan más al PP (residuo ajustado corregido 5,6) y mucho menos al BNG (-7,3). No recuerdan a quién votaron en gran proporción (6,0) y no suelen votar en blanco (-3,0), circunstancias ambas que parecen revelar poco compromiso con la política. Los no creyentes adoptan, aproximadamente, la pauta inversa: no suelen votar al PP (-4,7) y propenden en gran medida a votar al BNG (7,8). Tampoco, aunque de modo menos importante, propenden a votar al PSOE-EU (-2,2), lo que resulta llamativo, y suelen recordar bien por quién han votado.

Los católicos no practicantes se asemejan a los no creyentes en cuanto a su disposición a votar al PP (-2,2) y al BNG (3,6), aunque de modo menos acusado. También suelen recordar bien a quién han votado (-4,9). Su diferencia mayor con el grupo anterior es que muestran una disposición favorable hacia el PSOE-EU (3,3).

La imagen tradicional de la mujer es que era más religiosa, incluso mucho más religiosa, que los hombres. En Galicia siguen siéndolo. Religión y sexo se asocian significativamente, con un valor de chi cuadrado de 80,5. Los hombres católicos practicantes son muchos menos que las mujeres (residuo ajustado corregido -8,6) y, lógicamente, los no practicantes más (7,5). También son más los hombres no creyentes. En cambio, no hay diferencias entre hombres y mujeres en la adopción de otras religiones, probablemente porque, entre nosotros, hay muy pocas parejas mixtas en cuanto a las creencias religiosas.

Sin embargo, aunque la religiosidad influye en el comportamiento electoral, el elemento del sexo también aquí parece tener poca relevancia. Si cruzamos la variable del voto en las últimas elecciones con la de identificación religiosa, controlando el sexo, las diferencias no son muy grandes. Es más, la asociación entre identificación religiosa y opción de voto, contra todas las expectativas, presenta un valor más elevado para los hombres (chi cuadrado 122,8) que para las mujeres (105,5). Por categorías, las únicas diferencias relevantes revelan esta mayor independencia en las mujeres de creencias religiosas y opción electoral: las mujeres católicas no practicantes votan más al BNG que los hombres de su mismo grupo de identificación religiosa; también las mujeres no creyentes son menos renuentes a votar al PP que los hombres de su mismo grupo religioso.

Si nos referimos, no a la identidad religiosa, sino al grado de práctica religiosa, la asociación con la opción de voto sigue siendo significativa, pero su valor es muy modesto (chi cuadrado 29,8). Como era de esperar, los muy poco practicantes (que sólo asisten a los oficios de su religión algunas veces al año) son renuentes a votar por el PP (residuo ajustado corregido -3,7) y, en cambio, propenden a votar al BNG (3,2). Y los más practicantes (al menos, alguna vez por semana) son renuentes a votar a este último partido. Pero si controlamos, el sexo, la asociación pierde significatividad.

Un aspecto crucial para la democracia parece ser el establecimiento de una cultura de confianza. Pero esta exigencia ha sido referida a diversos aspectos, relacionables entre sí, pero perfectamente discernibles. Uno de ellos es el establecimiento de un cierto clima de confianza entre las elites y los activistas políticamente rivales. En los regímenes autocráticos el modo habitual de tratar a los que se oponen al gobierno es el encarcelamiento o la eliminación física. Un elemento inseparable de la democracia es la aceptación de la legitimidad de la oposición al gobierno. En lugar de ser considerados como traidores que conspiran para derrocarlo, los opositores son considerados una eventual alternativa de gobierno. En sentido inverso, se espera que si la oposición gana las elecciones, los gobernantes anteriores no serán ejecutados, encarcelados o desposeídos de sus propiedades, y que (en los plazos establecidos) los nuevos gobernantes convocarán nuevas elecciones en las que se podrá competir libremente por el poder.

En otro sentido, la confianza en el gobierno y, más en general en las autoridades fue considerada por Almond y Verba 1963, y en su tradición otros muchos, un elemento favorecedor de la estabilidad democrática. En este sentido es un ingrediente de su ideal de «cultura cívica». No sólo en investigaciones literarias, sino también en otras empíricas, se constató que las sociedades anglosajonas y del norte de Europa, que presentan rendimientos democráticos elevados, se caracterizaban por niveles satisfactorios de confianza en el gobierno. Por contraste, en las sociedades meridionales de Europa (y en las sociedades latinoamericanas) la desconfianza hacia las autoridades se asociaba con un funcionamiento precario de la democracia.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado en algunos de estos países que el público ha perdido progresivamente, y en medida relevante, la confianza en su gobierno. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1958, la gran mayoría de los norteamericanos creían que su gobierno nacional era sustancialmente honesto, pero el porcentaje de los que así opinaban bajó mucho en los años sesenta y setenta, y en 1994 la mayoría de los norteamericanos (51 por 100) creían que sus gobernantes eran deshonestos (Inglehart 1997, 217).

Esta notable erosión de la confianza en el gobierno ha suscitado muchas discusiones académicas. Existe un profundo desacuerdo acerca de por qué se ha producido. Ciertamente han podido influir los rendimientos gubernamentales. Por ejemplo, la confianza de los norteamericanos en sus fuerzas armadas cayó a niveles extraordinariamente bajos durante la desastrosa intervención en Vietnam, y, en cambio, se recobró hasta niveles muy altos tras las relativamente rápidas y afortunadas operaciones en la isla de Granada y en la Guerra del Golfo. Sin embargo, es claro que no se trata de una simple cuestión de los rendimientos del gobierno, pues en 1994, momento en que la confianza nacional, en los Estados Unidos, cayó más baja que en ningún momento anterior, el país estaba experimentando paz, crecimiento económico rápido, elevación de la renta personal, baja inflación y relativamente bajo desempleo.

Los rendimientos del gobierno influyen, de modo casi cierto, las evaluaciones del público, pero son evaluados según estándares interiorizados, que parecen haber cambiado en las últimas décadas. Si las evaluaciones de las masas dependiesen directa y exclusivamente de los rendimientos «objetivos», resultaría que prácticamente todos los dirigentes gubernamentales de las sociedades occidentales de los primeros años noventa —desde Felipe González a Clinton, pasando por Andreotti, Major, Mitterrand, etc.— figuran entre los más incompetentes y deshonestos que sus países hayan visto nunca. Y aunque en algunos casos la deshonestidad ha sido comprobada o es presumible, en términos generales, esta interpretación no parece plausible. No hay evidencias de que la corrupción gubernamental, en general, haya aumentado desde la generación anterior. En cambio, parece que los públicos evalúan actualmente a sus dirigentes y a sus instituciones con estándares más exigentes que los aplicados en el pasado.

Inglehart entiende que el cambio de los estándares de evaluación está vinculado con el desarrollo económico. Desde hace ya varias décadas. Lipset, 1959 y 1960, Rostow, 1961, Dahl, 1990 [1971], y otros sostuvieron que el desarrollo económico conducía a la democracia. También hay estudios empíricos que sostienen esta posición (Bollen, 1979 y 1980). Desde luego, es muy evidente una asociación entre la frecuencia relativa de sistemas democrático y niveles de desarrollo económico relativamente altos de los respectivos países. Deutsch, 1961, afirmó que el desarrollo económico moderno genera movilización social, lo que hace que la población sea más participativa, lo que, a su vez, favorece el camino a la democracia. Esto es casi seguro, pero es sólo una parte de la explicación. Inglehart, 1998 [1997], recogiendo inspiraciones de algunos de sus escritos anteriores [en particular Inglehart, 1988 y 1991 (1990)], ha intentado demostrar (basándose en las Encuestas Mundiales de Valores de 1990-1993) que el desarrollo económico conduce a la democracia no sólo porque moviliza a los públicos de masas, sino también porque tiende a generar orientaciones culturales que la apoyan. Y es este tipo de explicaciones las que son relevantes a nuestro propósito.

El desarrollo económico al tiempo que proporcionaría niveles relativamente más altos de seguridad existencial, reduciría la deferencia hacia la autoridad de los públicos de masas. Pero, la argumentación de Inglehart incurre en alguna vacilación y en alguna inconsistencia lógica. En primer lugar, y muy acusadamente, la noción de desarrollo económico tiene un referente societario; en cambio, el referente de la seguridad existencial es eminentemente individual. La pregunta sobre cuáles sean los indicadores del desarrollo económico es, quizá, trivial. Pero, la proyección de cualquier nivel de desarrollo económico, de su progreso o alteración, sobre la percepción de la propia «seguridad existencial», que es, si es algo, eminentemente individual, dista, en el argumento de Inglehart, de serlo.

Es fácil concordar con la proposición de que condiciones de inseguridad originan un reflejo autoritario —la tendencia a buscar líderes fuertes y autoritarios—. Pero el sentimiento de inseguridad existencial es difícilmente asimilable a carencias de desarrollo económico. El propio Inglehart, 1997, 218, parece entenderlo así cuan-

do dice que «in societies undergoing historical crises, a phenomenon has been observed that might be called the *authoritarian reflex*». En estos casos las crisis se conectan al ritmo de desarrollo, no al nivel de desarrollo. Los cambios muy rápidos conducen a agravar la inseguridad, evocando una poderosa necesidad de predictibilidad. La sustancia de este argumento fue formulada por Duverger hace ya años. En consecuencia, en contra de la asociación entre desarrollo económico, incremento de la seguridad existencial y reducción de la deferencia hacia la autoridad, en sociedades preindustriales o poco industrializadas cambios económicos rápidos (aunque sean en el sentido del desarrollo económico), propiciados por el contacto con sociedades más industrializadas, pueden generar un acrecimiento de sentimientos de inseguridad «existencial», que propicien fórmulas políticas autocráticas. La crisis de la autocracia en la Rusia zarista, a que alude Inglehart, 1997, es, parece obvio, más fácilmente asociable a la incapacidad de sus instituciones políticas para asimilar un notable —para el momento y el país, dadas sus tradiciones— proceso de desarrollo económico que a su ausencia.

Y no es de excluir que estos sentimientos de inseguridad sean más frecuentes entre los miembros de los estratos más tradicionales, que no necesariamente son los más desprovistos de recursos, por la percepción de que los cambios amenazan sus intereses económicos, vinculados al *status quo*. En estos casos, la «deprivación» existencial tiene poco que ver con la carencia de recursos económicos. Justamente por eso, la reacción al cambio toma la forma de un rechazo de lo nuevo y de una insistencia compulsiva en las pautas culturales antiguas y familiares. Justamente por eso, se presenta la disposición a confiar en líderes fuertes, en individuos «superiores», de carácter férreo, que puedan conducir al pueblo a la «salvación», esto es al mantenimiento de las esencias de la sociedad tradicional. Ésta es la sustancia de la generalidad de los intentos de recuperación del *ancien régime* en la Europa posterior a la revolución francesa. Que la inseguridad «existencial» y el subsiguiente recurso a fórmulas autocráticas no se vincula preferentemente al nivel de desarrollo lo evidencia, asimismo, el caso en que responde a derrotas militares que comprometen el «orgullo» o la identidad nacionales, en países relativamente desarrollados.

Por tanto, no me parece evidente que el relativo déficit de confianza, por relación a los públicos de los países pobres y autocráticos, en sus dirigentes e instituciones políticas que muestran los públicos de las prósperas, estables y democráticas sociedades industriales pueda ser explicado en referencia a su mayor «seguridad existencial», si ésta se pretende explicar por un mayor nivel de desarrollo económico. Formulado en estos términos el argumento es parcial y equívoco porque no se entiende cómo el argumento de seguridad existencial ha de excluir una evaluación mínimamente satisfactoria de los dirigentes e instituciones políticas del sistema en el que uno está implicado. Otra cosa, pero muy distinta y difícilmente justificable por el argumento de la seguridad existencial es que los sistemas democráticos incorporen, y propicien, una mayor capacidad crítica hacia los gobiernos respectivos. Pero la posibilidad de expresar posiciones críticas respecto de la autoridad es también un elemento del sistema político.

EL PAPEL DEL CAMBIO DE VALORES

Más difícil es objetar, por la propia naturaleza de la proposición, la vinculación de la disminución de la deferencia hacia la autoridad, en general, y hacia el gobierno y los dirigentes políticos, en particular, a una renovación de valores. En la encuesta mundial de valores de 1981, Inglehart encontró fuertes correlaciones entre las actitudes hacia la autoridad y los valores «materialistas»/«postmaterialistas», en casi todos los países: «materialists tend to support the proposition that “more respect for authority would be a good thing”» (Inglehart, 1997, 222). Consiguientemente con su suposición de que el mundo camina hacia el «postmaterialismo», predijo [Inglehart, 1991 (1990)] el decrecimiento del énfasis hacia la autoridad. Así ha ocurrido: desde 1981 a 1990 el énfasis en el respeto a la autoridad devino menos generalizado en diecisiete de los veintiuno países a los que se refieren ambas encuestas. Los niveles de apoyo a la autoridad y el tamaño de los cambios varían mucho de país a país, pero el énfasis en el respeto a la autoridad ha descendido en casi todos. Inglehart supone que este descenso generalizado del respeto a la autoridad ha contribuido a la erosión de la autoridad institucional. Los rendimientos también cuentan, pero la tendencia a idealizar a los líderes nacionales se ha debilitado, y los resultados de su actuación son examinados con un ojo más crítico.

¿A qué se debe este cambio de valores? La explicación de Inglehart es que deriva del incremento de la «seguridad existencial». Discutido ya el argumento de la comprensión de la seguridad existencial como una consecuencia del desarrollo económico, revisemos ahora su argumentación del cambio de valores.

Inglehart, 1997, 220, cree que cuando se alcanza un punto en el que la mayor parte de la gente considera garantizada su supervivencia física, comienza a surgir un número significativo de sus «postmaterialistas». Esta formulación, tomada literalmente, es muy discutible. La supervivencia física nunca está garantizada ni puede, por definición, ser garantizada. Ha de suponerse que lo que quiere decirse es que la mayor parte de la gente estima razonablemente asegurada la cobertura de sus necesidades de alimento, vestido, vivienda, ocio, etc. Pero esta estimación remite a estándares «razonables» para la época y el lugar, por tanto eminentemente relativos. Es la misma objeción que pudo hacerse al conocido tópico expresivo del paradigma de la política distributiva socialista: «a cada uno según sus necesidades» (cualquiera sabe que las necesidades personales de Marx incluían tener, al menos, una criada; pero si todo el mundo experimentase la misma «necesidad», es difícil imaginar un sistema social que pudiese satisfacerla). El mínimo «naturalmente» imprescindible de alimento, vestido y vivienda, supone unas condiciones de vida tan precarias que difícilmente pueden alentar valores «postmaterialistas». Sin embargo, el propio Inglehart constata que, aunque «sus» postmaterialistas tienen más altos niveles de renta, educación y status ocupacional que los «materialistas» no manifiestan más altos niveles de bienestar subjetivo. Ello se debe a que toman la prosperidad material como garantizada, pero no están satisfechos con otros aspectos de la vida, como la política o la calidad del ambiente físico y social. Estos dominios son subjetivamente

más importantes para los «postmaterialistas» que para los «materialistas» y, consiguientemente les aplican estándares de evaluación más exigentes: «thus, although postmaterialists generally live in less noisy, less polluted neighborhoods than materialists, they register lower, not higher, levels of satisfaction with their environment» (Inglehart, 1997, 220).

La observación es inobjetable; su interpretación, en cambio, con arreglo a la dicotomía «materialistas»/«postmaterialistas», es escasamente convincente. Resulta obvio, y no hay ninguna novedad en ello, que si no tienes otra cosa que comer que garbanzos, los garbanzos se constituyen en un objetivo prioritario de tu interés; en cambio, si tienes mil manjares a tu disposición es probable que los garbanzos merezcan muy poco de tu interés. Siempre ha sido y siempre será así. Pero la pérdida de interés por los garbanzos no significa la pérdida de interés por la «comida». El error de Inglehart es suponer que *sus* «postmaterialistas» tienen valores distintos que *sus* «materialistas», cuando en realidad lo que tienen son «valores», más bien preferencias, adicionales. Por eso mismo evalúan la realidad política con estándares más exigentes. Aunque tienen mayores capacidades para realizar sus preferencias y son políticamente más activos, no presentan niveles más altos de satisfacción con el sistema (no se conforman con sólo garbanzos). Históricamente hay mil ejemplos de conflictos sociales entre elites y masas, en los que las primeras, inspiradas por intereses más «elevados» se enfrentan a las demandas mucho menos «nobles», más constringentes y primarias, de las masas.

Según el mismo autor, los ciudadanos articularían mejor sus preferencias y adoptarían estándares para la evaluación de los líderes políticos más exigentes que en el pasado, y serían crecientemente propensos a comprometerse en actividades de desafío a las elites. Un énfasis en la autoexpresión y en la autorrealización estaría adquiriendo, progresivamente, un papel central. El público vería cada vez menos la necesidad de la disciplina y de las restricciones exigidas por los gobiernos fuertes. En consecuencia, la posición de las elites se habría hecho más difícil.

Inglehart, 1997, 220, niega, respecto de los Estados Unidos, la creencia ampliamente aceptada de que la gente se haya hecho crecientemente apática y no comprometida en política: «voter turnout has indeed declined, but this mainly reflects the diminishing ability of the established political parties to mobilize their supporters: the number of disciplined, unquestioning party loyalists is declining». El descenso de las tasas de participación electoral no significa, según este autor, desencanto con el sistema ni apartamiento de la política. No hay ni alienación ni apatía. En términos más generales, Inglehart encuentra evidencias empíricas de que a pesar del estancamiento de la participación electoral (que él atribuye básicamente al debilitamiento de la lealtad a los partidos políticos), los públicos «occidentales» no han devenido apáticos —más bien al contrario.

En efecto, mientras la participación electoral está estancada o en descenso, en las dos últimas décadas ha crecido la participación en formas más activas de acción política (que implican un desafío a las elites). En todas las sociedades industriales, los públicos están crecientemente más propensos a discutir de política y a firmar pe-

ticiones, a tomar parte en boicots y acciones similares, a incorporarse a grupos orientados a algún problema particular, y a comprometerse en otras formas no tradicionales de activismo político [ver Inglehart, 1991 (1990), y 1998 (1997)].

Los ciudadanos se han hecho crecientemente críticos hacia los políticos y los partidos políticos, y están más dispuestos a usar formas no institucionales de acción política para procurar sus objetivos. Las instituciones autoritarias han padecido un descenso continuado de la confianza de las masas a lo largo de la historia de la sociedad industrial avanzada. Actualmente, según Inglehart, la erosión de la confianza en las instituciones no se aplica a todas, sino sólo a las instituciones específicamente autoritarias. Durante los mismos años en que la confianza en la autoridad pública se debilitaba, surgieron los movimientos de protección ambiental y obtenían niveles notablemente altos de confianza del público: en la encuesta mundial de valores de 1990-91, sobre más de cuarenta países el 93 por 100 de los encuestados aprobaban sin reservas el movimiento medioambiental, y el 55 por 100 lo aprobaban «fuertemente».

Un componente central de la modernización fue el cambio de la autoridad religiosa y/o tradicional por la autoridad burocrática racional. Un componente principal del cambio actual sería el alejamiento de toda clase de autoridad. Este alejamiento sería consecuencia de la potenciación del individualismo, ya que evita los costes de subordinación de los objetivos personales a los de una entidad más amplia. En condiciones de inseguridad, frente a amenazas de invasión, desorden interno o colapso económico, la gente está dispuesta a asumir estos costes, y busca ansiosamente figuras de autoridad fuerte que puedan protegerlos; en pocas palabras, el «reflejo autoritario» es más fuerte. En cambio, condiciones de prosperidad y seguridad conducen al pluralismo y a la democracia.

SENTIMIENTO HACIA LA POLÍTICA Y EDAD

Si las cosas fuesen así, parece lógico que la variable edad se asocie significativamente con el sentimiento hacia la política. Incluso, en términos más generales, parece razonable suponer que la edad de los individuos influye de modo importante sus actitudes y comportamientos políticos. Es más, tengo la impresión que, al menos en el marco de una sociedad dada, la edad es la variable con mayor capacidad explicativa de las diferencias de actitudes políticas (no tan claramente, en cambio, de los comportamientos).

Esta suposición no tiene por qué ser vinculada exclusivamente a efectos de ciclo vital, como se aplica en «prenociones» de uso habitual en el lenguaje trivial (y a veces, más o menos disfrazadas, también en el académico), prenociones de la especie de que los jóvenes son «más rebeldes» o «más generosos», y los viejos «más conservadores» o «más egoístas». Puede ser vinculada también a efectos de cohorte (presumiblemente cada cohorte de edad experimenta procesos socializadores particulares) o a, los más cuestionables, efectos de «período» (en ciertos momentos tempora-

les pueden haberse dado acontecimientos o procesos de particular relevancia histórica, que marquen las actitudes y comportamientos políticos de ciertos grupos de edad).

En términos generales, Justel, 1992, 91, concluyó, muy enfáticamente, que los cambios experimentados en la cultura política de los españoles se debían más a efectos de período o de cohorte, que de ciclo vital. Este autor no registraba grandes oscilaciones de las actitudes políticas básicas atribuibles al proceso mismo del envejecimiento personal. Y en la medida en que las constataba eran atribuibles más a diferencias de educación que de edad (ver Justel, 1992, 91-92). Aun así, según este autor, prevalece el efecto histórico del período transicional como momento de resocialización política generalizada en la sociedad española, que se afianza en la década de los ochenta, sobre el efecto diferencial asociado a las sucesivas cohortes de edad en función de sus experiencias propias.

En nuestro análisis, en una perspectiva sincrónica, la correlación del sentimiento político con la edad es muy débil y poco significativa. Si comparamos las medias, se constata que el grupo de edad con sentimiento más positivo hacia la política es el de aquellos que tienen entre 36 y 45 años (3,49, para una media del conjunto de la población de 3,68; 1, significa entusiasmo, y 7, irritación). En contra de suposiciones bastante frecuentes, el grupo de edad más joven tiene un sentimiento (ligramente) más positivo hacia la política que la media de la población; es el inmediatamente siguiente al de 36-45 años en sentimiento positivo hacia la política. Son los grupos de más edad los que, por el contrario, experimentan menos sentimientos positivos hacia la política (3,79, los de más de 65 años; y 3,78, los de 56 a 65 años).

Los sentimientos hacia la política describen una curva ascendente hasta el tramo de 36-45 años, que es el que registra sentimiento más positivos, y una curva descendente a partir de esta edad. Esto podría ser interpretado como un reflejo del ciclo vital (en cuanto expresión de perspectivas de carrera individual y de conquista de posiciones sociales). El sentimiento positivo hacia la política acrece progresivamente hasta la edad de «conquista» de las posiciones profesionales y de carrera (en un sentido muy genérico de esta expresión). A partir de ahí, aunque naturalmente el progreso profesional puede continuar, particularmente en las profesiones «superiores», es más fruto de rendimientos aplazados de la conquista anterior, que fruto de nuevas conquistas. De suerte que el interés por la política comienza a decrecer, para caer en pendiente rápida a medida que se acerca la edad de jubilación. El interés por la política sería, por un lado, un recurso para hacer carrera, o estaría asociado a los recursos para hacer carrera y, por otro lado, sería signo de status: entre las elites está mal visto no interesarse por la política.

Así, si examinamos los sentimientos prevalentes dentro de los grupos de edad, a los encuestados entre 18 y 25 años la política les aburre más que a la media de la población, pero, en cambio desconfían de ella menos que la media. Esto es, la política no ocupa (todavía) un lugar relevante en sus preocupaciones. En cambio, como se desprende de lo dicho anteriormente, a aquellos entre 36 y 45 años les interesa más que la media. Entre 46 y 55 años los sentimientos hacia la política están más carga-

dos afectivamente: sienten entusiasmo por la política y se consideran comprometidos en ella más que la media; consiguientemente sienten hacia ella menor indiferencia que la media. Entre los de 65 y más años predomina la desconfianza hacia la política, y se sienten menos comprometidos o irritados por ella que la media.

Esto se confirma examinando la relación entre el sentimiento inspirado por la política y la situación laboral. Hay una asociación significativa entre una y otra variable, con un valor de chi cuadrado de 92,0. Examinando los residuos ajustados corregidos se constata que el grupo de los que trabajan es el que experimenta sentimientos más positivos hacia la política (en particular, de compromiso, 3,4; e interés, 2,7) y, por lo general, menos sentimientos negativos (en particular, indiferencia, -2,3, y aburrimiento, -3,2). El grupo de estudiantes tiende a aburrirse con la política (3,0), pero no desconfía de la actividad política (-3,5); esto es lo mismo que el grupo de edad de 18 a 25 años, al que lógicamente pertenecen casi todos. Los jubilados experimentan menores sentimientos de compromiso (-2,2) y mayores de desconfianza (2,4), más o menos como el grupo de edad de 65 y más años, al que lógicamente pertenecen casi todos. El grupo de sus labores manifiesta tendencias inversas al grupo de los que trabajan: se siente escasamente comprometido (-3,2) e interesado (-3,1), y tiende a desconfiar de la política (3,6). Dado que este grupo es típicamente femenino (el 95,5 por 100 de sus integrantes son mujeres), estos datos se corresponden con los que vimos antes a propósito de la variable sexo.

SENTIMIENTO HACIA LA POLÍTICA Y POSICIONAMIENTO IZQUIERDA/DERECHA

Como es conocido, la orientación izquierda/derecha es uno de los modos básicos, ciertamente a un nivel abstracto, de conceptualización de las ideas políticas en general, y por consiguiente de posicionamiento de los individuos ante la realidad política (ver Fuchs y Klingemann, 1990). Unas veces ha sido considerado como el *cleavage* ideológico primordial; otras, como una especie de expresión condensada de las diferencias que se manifiestan en una pluralidad de dimensiones independientes, pero siempre como el más importante.

Respecto a la relevancia actual de las diferenciaciones ideológicas hay sustancialmente dos posiciones. La, quizá, dominante (y que sus críticos suelen atribuir a visiones de «derecha») constata una disminución de la relevancia del *cleavage* ideológico [Esta visión fue popularizada inicialmente por Bell, 1964 (1960)]. Las etiquetas tradicionales traducirían más inercias históricas que diferencias políticas reales, al menos respecto de las diferencias políticas constitutivas de la tradicional contraposición entre izquierda y derecha.

En cambio, Inglehart y la mayor parte de los teóricos de los nuevos movimientos sociales rechazan la visión de que la política actual no contenga ya luchas ideológicas. Así, la suposición generalizada de una afinidad sustancial entre la «nueva política» y la izquierda del espectro político en su consideración más tradicional, sugeriría que izquierda y derecha continúan siendo importantes líneas de división,

aunque el significado de estos términos pueda haber cambiado bastante. De esta manera los «verdes» desempeñarían el rol y ocuparían el espacio que antes desempeñaron y ocuparon los «rojos» (comunistas).

En cualquier caso, la evidencia trivial parece indicar que la gente de izquierda alberga, al menos entre nosotros, sentimientos más positivos hacia la política que la gente de derecha. ¿Es correcta esta apreciación?

A este propósito, conviene observar, en primer lugar, que en Galicia, si examinamos las encuestas realizadas por el CIS desde la restauración de la democracia, la media de la autoubicación ideológica, en una escala de 1 a 10, suele situarse hacia el centro de la escala, entre el punto 5 y el punto 5,3, sin que los leves desplazamientos de una a otra encuesta parezcan significativos. Del mismo modo, el valor más frecuentado por los encuestados es uno de los centrales, el 5, por tanto con una leve inclinación a la izquierda, que suele recoger alrededor del 20 por 100 de los que expresan opinión.

Nuestros datos revelan una asociación significativa entre el sentimiento hacia la política y la ubicación izquierda/derecha (chi cuadrado de Pearson 173,6). Utilizando la técnica de residuos ajustados corregidos se revela que los apolíticos experimentan muy destacadamente sentimientos de indiferencia (5,4) o aburrimiento (4,6) hacia la política. Naturalmente, el hallazgo es enteramente trivial, pues ambos indicadores miden sustancialmente lo mismo, pero es al mismo tiempo muy satisfactorio en cuanto test de corrección del diseño y aplicación de la encuesta.

Entre los que se declaran muy de izquierdas hay pocos indiferentes a la política (-2,4), pero los sentimientos hacia la política son encontrados. Hay muchos (4,2) a los que la política les produce irritación, sentimiento que seguramente se explica porque la política real dista de corresponderse con lo que «debería ser», según la representación que de ella se hacen los muy de izquierda. Pero también hay bastantes (2,5) para los que la política suscita, conforme a lo que cabía esperar un sentimiento de compromiso.

Los que se declaran de centro-izquierda experimentan básicamente los mismos sentimientos que los muy de izquierda, aunque más mitigados. Son menos los indiferentes (-2,4) y los que experimentan sentimientos de aburrimiento (-2,2) ante la política, pero entre los que adoptan una actitud menos neutral también hay ambigüedad. Para algunos predomina el sentimiento de compromiso (2,3); para otros el de desconfianza (2,0).

Entre las gentes que se declaran de centro tiene relativamente poco predicamento el compromiso (-2,3), y sí más el interés (presumiblemente «descomprometido» (2,3). La gente que se declara de derechas no presenta peculiaridades relevantes. Finalmente, los muy de derechas tienden a experimentar sentimientos de compromiso (3,3) e interés (2,1).

Como era de esperar, el sentimiento de compromiso es experimentado preferentemente por la gente que se sitúa en los extremos de la dimensión ideológica (muy de izquierdas o muy de derechas).

Un modo sintético de establecer la relación entre la autoubicación ideológica y el sentimiento hacia la política es comparar las medias, dado que, en nuestra formulación, la segunda variable es ordinal. Pues bien, de esta comparación se desprende que el sentimiento más favorable hacia la política (en contra de las suposiciones generalmente aceptadas en Galicia) se manifiesta entre las gentes que se consideran muy de derechas (2,79; 0 significa entusiasmo; y 6, irritación). El más negativo se registra entre los apolíticos (3,95), lo que parece natural, y los de izquierdas (3,81 para los muy de izquierdas, y 3,67 para los bastante de izquierda), lo que, en cambio, choca contra las suposiciones habitualmente admitidas. Por otra parte, los apolíticos es la categoría que presenta mayor homogeneidad (desviación estándar 1,01), y la que menos los bastante de izquierda (1,79).

SENTIMIENTO HACIA LA POLÍTICA Y AFILIACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

En términos generales, la integración en un partido político es un fenómeno que ofrece varias dimensiones. Estar dentro, ser miembro, de una organización política, obviamente, supone «no estar fuera». Esto es una obviedad, pero implica significados políticos enérgicos, tanto para la persona afiliada, como para los que la rodean.

En general, en los escritos sobre la democracia, del siglo xx, se valora positivamente la adhesión a los partidos políticos. Pero el partidismo no siempre fue bien visto. Hume, en su *Enquiry concerning the principles of morals*, par. 182, afirma que el fervor partidista y la devoción a los líderes de los partidos, aunque efectos de la sociabilidad humana, no son demasiado benéficos (ver Hume, 1902, 224). Y la mayor parte de los teóricos de la democracia de finales del siglo xviii y principios del xix se manifiestan en parecido sentido, incluso, como es sabido, en términos más enérgicos. La cuestión es si, al margen de las especulaciones o de los análisis sobre la democracia posteriores, que suelen exaltar la utilidad de los partidos políticos, percepciones análogas a las clásicas informan las opiniones de una parte considerable de la población.

Para los afiliados de base, esto es, aquellos no comprometidos, transitoria o permanentemente, en una carrera política (o más simplemente, en la prosecución de cargos), los incentivos principales para la afiliación partidista pueden ser propósitos de prosecución de determinadas políticas (por tanto, propósitos «racionales»), pero también pueden ser solidarios y/o simbólicos. Estos segundos no implican en principio una mayor apertura a la información política. Por el contrario, pueden funcionar como instancias de obturación (mediante mecanismos fideistas). Sin embargo, la afiliación a un partido suele corresponderse con un mayor interés e información política (aunque ésta pueda ser enteramente sesgada). El afiliado vive en un medio en el que la actividad política adquiere una mayor relevancia que para la generalidad de la población no afiliada. Y aunque su incentivo primario o más poderoso para la afiliación fuese de carácter estrictamente simbólico, el «ambiente» le incita enérgicamente a recibir información política (aunque sea sesgada) y a comprometerse en op-

ciones de políticas (aunque sean formuladas de modo simplista e ideológico). Ya Almond y Verba 1963 observaron que los encuestados más altos en la escala de competencia ciudadana subjetiva propendían a ser activistas de partido (ya fuese como miembros de algún partido, ya como participantes activos en campañas electorales).

En nuestra encuesta, el sentimiento hacia la política correlaciona con la cercanía a partidos políticos a un nivel de, 18 (coeficiente r de Pearson). A efectos de comparación, aproximada, ya que las preguntas no tenían la misma formulación, es el mismo valor que el de Portugal, en la encuesta que refieren Castillo y Crespo, 1997, 84, y algo más bajo que la media del conjunto español, en la misma encuesta (.21). Los valores más altos en esta encuesta son los de Grecia e Italia (.36), y los más bajos, el ya citado de Portugal, y el de Francia (.20).

Si examinamos los valores ajustados corregidos de las diferentes categorías se constata que los que se declaran cercanos a los partidos políticos experimentan en mucha mayor proporción sentimientos de compromiso (6,7) e interés (7,0) por la política. En el mismo sentido, son menos indiferentes a la política (-4,7) y les aburre (-4,4) e irrita (-2,7) menos que a los no cercanos a los partidos.

LEGITIMIDAD: PREFERENCIA POR UN SISTEMA POLÍTICO

Todo sistema de gobierno depende, por definición, de alguna fórmula de legitimidad. Si las decisiones de los dirigentes no son vistas como legítimas descansarán solamente en la coerción. La legitimidad es un bien para cualquier sistema político, pero, en particular, es crucial para la democracia. Un aspecto particularmente relevante para la estabilidad de la democracia es la difusión masiva de la legitimidad democrática. En régimen democrático, lo que el gobierno hace debe ser, al menos, bastante satisfactorio para la mayor parte de los ciudadanos, de modo que no se vuelvan contra el gobierno. Para que un sistema democrático sobreviva, al menos a medio plazo, debe ser aceptado por la generalidad de los ciudadanos, cuando menos por una parte muy importante de ellos, como una forma de gobierno suficientemente adecuada, de modo que la opción por otra cualquiera alternativa presente más costes que la aceptación del *status quo*. Elites nacionales o imposiciones extranjeras pueden establecer instituciones democráticas, pero su supervivencia depende de su arraigo entre el público, porque con la democratización el público se convierte en un elemento político crucial.

Varios escritores han subrayado la importancia de este factor: Weber, en su análisis y tipologización de la legitimidad; Easton, en su categoría de «apoyo difuso» al sistema; Almond y Verba, en la de su «cultura cívica»; Inglehart, 1991 [1990], enfatizando (sobre datos de la Encuesta Mundial de Valores de 1981) la importancia de la confianza interpersonal y del bienestar subjetivo para la supervivencia a largo plazo de la democracia; Putnam, 1993, mostrando la contribución de las «orientaciones cívicas» a la eficacia de la democracia en Italia, etc.

Nosotros preguntamos, «¿qué sistema político le parece a Ud. la mejor forma de gobierno?». Las alternativas de respuestas ofrecidas fueron: «democracia/dictadura/comunismo/anarquía». Una gran mayoría de los encuestados, el 84,3 por 100 del total (que representan el 94,3 por 100 de las respuestas válidas) consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno. Poco más del 10 por 100 no saben/no contestan. La dictadura, segunda respuesta en orden de preferencia, sólo es elegida por el 2,6 por 100 de los encuestados (2,9 por 100 de las respuestas válidas).

Para una pregunta similar, «¿la democracia es el mejor sistema para un país como el nuestro?», formulada habitualmente en las encuestas de DATA y del CIS, Montero, Gunther y Torcal, 1997, 5, ofrecen una serie temporal de los porcentajes de respuestas positivas, que va del 77 por 100 en 1978 al 82 por 100 en 1994. Este último porcentaje es muy similar al obtenido en nuestra encuesta (en 1998).

La conclusión parece inequívoca. Los gallegos, como los españoles en general, respaldan abrumadoramente la democracia. Estos resultados pueden considerarse sorprendentes, por referencia al supuesto comúnmente aceptado de que la socialización política en valores opera lentamente, dado que una gran parte de la población fue socializada, bajo el régimen franquista, en valores antidemocráticos (énfasis jerárquico, «nacionalcatolicismo», descalificación de la «política» y consiguiente desincentivación de la participación política). Para el conjunto de España, el extraordinariamente alto nivel de apoyo a la democracia en 1978 fue atribuido por algunos autores (por ejemplo, Weil, 1989) a un efecto de «luna de miel», lo que explicaría el abrumador voto de confianza dado a las instituciones democráticas desde el momento de su implantación. Pero la evolución posterior desautoriza esta interpretación. Aunque en 1981 se registró un cierto descenso de la extensión de esta actitud, todas las encuestas confirman la persistencia de un alto nivel de la legitimidad democrática a partir de aquella fecha, con frecuencia superior al de 1978. Correlativamente, a lo largo de todo el periodo se evidencian muy bajos niveles de apoyo para las alternativas no democráticas. La consistencia de esta actitud viene confirmada por el comportamiento electoral, ya que las alternativas no democráticas (sobre todo, si se exceptúa el nacionalismo radical vasco, cuyo relativo éxito se debe a conocidos factores particulares) han conseguido tan pocos votos que apenas han obtenido representación parlamentaria.

Justel, 1992, 91-92, lo atribuye a «que el cambio cultural experimentado por la sociedad española durante el período en que se incuba y se realiza la transición a la democracia es un cambio generalizado y hasta profundo que afecta a todos los grupos de edad de manera sustantivamente igual, y en ese sentido habríamos de hablar de un claro efecto histórico o efecto de período. Se ha producido una “resocialización” general de la población adulta en lo político. El cambio cultural aparejado al período de transición política y los cambios en el mismo sentido que ponen de manifiesto los datos empíricos sobre la década de los años ochenta (...) afectan de forma generalizada a todos los grupos de edad, también a los viejos» (Justel, 1992: 91-92). En síntesis, el período de transición a la democracia se presenta como un momento de resocialización política generalizada en la sociedad española. Y en conexión con

ello, ha de tenerse en cuenta, más particularmente que, como ha sido señalado por algunos autores (Linz, reiteradamente), la asimilación del régimen político al contexto internacional inmediato fue en España un móvil endógeno del cambio político.

Inglehart, en la generalidad de sus escritos [últimamente 1998 (1997)] y, entre nosotros, el citado Justel, 1992, afirman que el incremento de los niveles de vida y de educación formal refuerzan la adhesión a la democracia. De tal suerte, no dudan en aventurar una tendencia progresiva al incremento de la democratización, en la misma medida en que crecen los niveles de renta y de educación formal (y/o parámetros asociados).

OPINIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA DEMOCRACIA

La creciente importancia de las preferencias de las masas es inherente a la naturaleza misma de la democracia. Si las instituciones democráticas no logran tener un apoyo de masas profundamente arraigado para hacer frente a tiempos difíciles, es posible que no los resistan. Los resultados positivos de un sistema político pueden generar el apoyo de las masas a las instituciones de autoridad establecidas. Pero, independientemente de la percepción a corto plazo de los resultados del sistema, éste puede, por diversas razones, obtener un «apoyo difuso» (Easton, 1963), es decir, puede existir una percepción suficientemente generalizada de que el sistema político es bueno (o, cuando menos, suficientemente aceptable para no intentar cambiarlo). Por tanto, este tipo de apoyo puede persistir incluso en tiempos difíciles.

Justel, 1992, fue de los primeros, entre nosotros, en diferenciar el apoyo al sistema de la opinión sobre su funcionamiento. Probablemente —dice— a medida que disminuya el número relativo de ciudadanos con menor nivel cultural formal se incrementará el número de partidarios de la democracia. Pero, también aumentará el número de los críticos con su funcionamiento. La misma competencia o capacidad de discernimiento político que tiende a acrecer la preferencia por el sistema democrático, puede inducir una mayor capacidad crítica y una mayor exigencia respecto a su funcionamiento efectivo.

Preguntamos: «*¿en relación con nuestro sistema político, la democracia diría Ud. que funciona...?*». Las alternativas de respuesta ofrecidas fueron: «*muy bien/bien, aunque es mejorable/mal, tendría mucho que mejorar/ y muy mal*». La opinión dominante es que funciona bien, aunque es mejorable (47,5 por 100 del total de los encuestados, que representa el 51 por 100 de las respuestas válidas. Si se le suman las respuestas de los que creen que funciona muy bien, el 58,5 por 100 de las respuestas válidas muestran una opinión favorable sobre el funcionamiento de nuestra democracia). Las opiniones de que funciona mal suponen el 33,7 por 100 de las respuestas válidas. Los valores «muy bien», «muy mal» y «no sabe/no contesta» reúnen cada uno alrededor del 7 por 100 del total de las respuestas.

LA COMPETENCIA POLÍTICA (DE CIUDADANO)

Fuchs, Guidorossi y Svensson, 1995, 347-348, han notado que indicadores del tipo «“satisfaction with the way democracy works [in your country]” refers to the informal structure and measures support at a low level of generalization. But (...) there are all manner of ways in which a democracy system, in practice, may fail to live up to democratic principles (...) But citizens may be prepared to live with the deficiencies of a democratic system because they are committed to democracy as an idea, or as principle according to which government should be conducted. Moreover, critics who are dissatisfied with the way democracy works in their country may not see a promising alternative system of government. In other words, dissatisfaction with the way a democracy works may be mitigated by support expressed at a higher level of generalization».

Este razonamiento evoca la cuestión de la competencia ciudadana ¿Es razonable que los ciudadanos crean que pueden influir en las decisiones políticas?; y si lo es, ¿hasta qué punto? Almond y Verba, 1963, llamaron «competencia de ciudadano» a una creencia caracterizada en esta posibilidad de influencia. Mantuvieron que esta «competencia» es beneficiosa tanto para los individuos como para la estabilidad del sistema democrático. Dado que su supuesto es que la democracia es incuestionablemente el mejor de los sistemas de gobierno posibles, queda fuera de su interés la estimación del realismo de la creencia en la competencia (del común de las gentes) de influir en el gobierno.

Lo que más les preocupó no fue tanto el realismo o la ilusoriedad de la competencia de ciudadano (a nivel de masas), sino el análisis de en qué modo el individuo competente subjetivamente difería de aquel otro que no siente que los asuntos del gobierno y de la política sean sensibles a su influencia. Trataban, sobre todo, de conocer las implicaciones que para la estabilidad del sistema (democrático) podían tener el conjunto de orientaciones políticas frecuentes entre una ciudadanía que se considera capaz de participar en las decisiones gubernamentales —ya impliquen estas orientaciones creencia en la efectividad o no del sistema, ya impliquen lealtad o no al sistema.

Pero, pese a ello, sus mediciones de la competencia subjetiva de ciudadano revelaron no sólo diferencias nacionales (lo que es irrelevante para nuestro argumento), sino también considerables diferencias internas vinculables, más o menos directamente, a la estratificación social. Esto no es particularmente llamativo, pero cuestiona, mucho más de lo que el pensamiento político convencional gusta de admitir, el supuesto igualitario de las concepciones tradicionales de la democracia. Y desde 1963, fecha de la obra de Almond y Verba, no ha habido ninguna medición de la competencia de ciudadano o de indicadores análogos en la que los individuos más pobres y menos ilustrados no ofrezcan, en términos generales, índices menores que los más ricos y más ilustrados.

Una intuición de este estilo está en la base de la autojustificación de la generalidad de los revolucionarios contemporáneos. Dado que las masas son constitutiva-

mente incapaces de elevarse al nivel de «conciencia» y conocimiento políticos de las elites, «aquí estamos nosotros para sustituirlas». Naturalmente, el problema está en quien les «ha dado vela» a los revolucionarios para esta suplantación. ¿No será más «normal» admitir que las masas tienen menos recursos y menos incentivos para interesarse por la política que las elites? Y si esto fuese así, ¿no será más decente, y más igualitario, disminuir el ámbito y la trascendencia de la política que suplantar la «voluntad» de las masas?

Naturalmente, la cosa puede ser vista menos dramáticamente, como una mera deficiencia temporal. Si el interés político y la competencia de ciudadano fuesen función, preferentemente, del acceso a un cierto umbral de educación formal, el progreso del proceso de democratización de la enseñanza tendería a la desaparición de las diferencias. Es posible, pero yo no soy tan optimista porque, en primer lugar, no creo que la cuestión se juegue exclusivamente en el terreno de los recursos educativos; influyen otras circunstancias conectables con el tipo de inserción en el sistema de producción (material y simbólica) social; y, en segundo lugar, el proceso de democratización de la enseñanza, por lo menos tal como se produce en España, podría estar generando una igualación más aparente que real; podría ser que se estuviesen igualando más «títulos» que competencias.

Un modo de medir de un modo concreto la percepción de la propia competencia como ciudadano es preguntar la opinión sobre la forma más eficaz de influir en las autoridades. Se preguntó: «De las siguientes posibles formas mediante las que los ciudadanos pueden influir en las autoridades, ¿cuál cree Ud. que es la más eficaz?» Las alternativas de respuesta que se ofrecieron fueron: «organizar un grupo con amigos o vecinos»/ «actuar a través de un partido político»/ «escribir cartas o hacer visitas a las autoridades»/ «actuar a través de un sindicato o grupo profesional»/ «participar en huelgas, manifestaciones, sentadas»/ «realizar algún tipo de acción violenta»/ y «denunciarlo a la prensa u otros medios de comunicación». Se requirió una sola respuesta.

Poco más del 10 por 100 de los encuestados no saben/no contestan. El valor más frecuentado es el de denunciarlo a la prensa u otros medios de comunicación (20,3 por 100 de las respuestas válidas). Aunque, de modo para mí sorprendente, Inglehart incluye a la prensa y a la televisión entre las instituciones autoritarias, esta opinión podría inducir la apreciación de que los ciudadanos no confían demasiado en los canales de participación más institucionalizados. Pero, sin aventurar tal conclusión, esta opinión parece muy razonable, ya que hay sobradas evidencias de que los gobernantes son particularmente sensibles a las denuncias o reclamaciones formuladas a través de los medios de comunicación. El menos frecuentado es el de realizar algún tipo de acción violenta (sólo el 2,8 por 100 de las respuestas válidas), lo que se cohonestaba con la amplia difusión de la legitimidad democrática.

La opinión sobre el modo más eficaz de influir en las autoridades se asocia significativamente con la opinión sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático (χ^2 cuadrado 57,1). Por categorías, con arreglo a la técnica de residuos ajustados corregidos, se constata que aquellos que creen que nuestra democracia funciona

muy bien son particularmente renuentes a la creencia en la eficacia de huelgas, manifestaciones y sentadas. Esto es enteramente lógico, pues aunque estos medios de influencia son legítimos en democracia parecen recursos subsidiarios al ejercicio de la influencia por otros medios más formales. Los que creen que funciona bien, aunque sea mejorable, son particularmente renuentes a considerar que la organización de un grupo con amigos o vecinos sea la forma más eficaz de influir en las autoridades (-4,0); y prefieren la actuación a través de partidos políticos (2,2) y, sobre todo, a través de un sindicato o grupo profesional (3,3).

En cambio, aquellos que creen que nuestra democracia funciona mal, y tendría mucho que mejorar, consideran lo contrario: creen que la forma más eficaz de influir en las autoridades es organizar un grupo con amigos o vecinos (residuo 2,3), y no creen que sea eficaz actuar a través de sindicatos o grupos profesionales (-2,1) o de partidos políticos (-1,9). Los que creen que nuestra democracia funciona muy mal, también opinan que una forma eficaz de influir en las autoridades es organizar un grupo con amigos o vecinos (2,2), pero sobre todo creen, muy coherentemente con su opinión sobre el mal funcionamiento del sistema, que la forma más eficaz de influencia en las autoridades es la participación en huelgas, manifestaciones o sentadas (3,1).

Los resultados, pues, son consistentes lógicamente. El único que merece comentario particular es el relativo a la valoración de la eficacia de la organización de grupos con amigos o vecinos como modo de influir en las autoridades. Con frecuencia, este tipo de actuación ha sido presentado como una modalidad en un *continuum* de acción cooperativa, que culminaría en la actuación a través de grupos más institucionalizados como sindicatos o partidos políticos. De nuestros datos parece desprenderse, en cambio, que no son consideradas como actuaciones complementarias o sucesivas, sino que funcionan como medios de acción alternativos. Aquellos que tienen una mejor opinión sobre el funcionamiento del sistema confían más en la acción en grupos institucionalizados; los que tienen una peor opinión confían más en la acción a través de grupos ocasionales.

Esta apreciación se confirma si cruzamos la opinión sobre la forma más eficaz de influir en la autoridad con el tamaño del hábitat de los encuestados. Aquí, la asociación es más fuerte (*chi cuadrado* 122,2). Comparando las medias se aprecia que la estimación de la eficacia de las diversas formas posibles de influir en las autoridades se asocia al tamaño del hábitat con arreglo a esta serie: actuación a través de los partidos políticos (3,84); participación en huelgas, manifestaciones o sentadas (3,38); denunciarlo a la prensa u otros medios de comunicación (3,28); actuar a través de sindicatos (3,24); organizar grupos con amigos o vecinos (2,95); escribir cartas o hacer visitas a las autoridades (2,77); y realizar acciones violentas (2,42). A mayor valor de la media, mayor asociación entre la preferencia por este modo de influencia y mayor tamaño del hábitat. Así, las formas «más urbanas» de modo de influencia son la actuación a través de partidos políticos, muy caracterizadamente, y la participación en huelgas, manifestaciones y sentadas. Las formas más «rurales» son la realización de acciones violentas, muy caracterizadamente, escribir cartas o hacer

visitas a las autoridades, y organizar grupos con amigos o vecinos. También muy caracterizadamente, los que no contestan a esta pregunta suelen ser habitantes del rural, y lo mismo acontece, aunque de modo menos pronunciado, con los que «no saben».

CONSUMO DE INFORMACIÓN POLÍTICA

Para terminar, exploraremos el consumo de información política como indicador del interés por, y de los sentimientos hacia, la política. Este consumo se asocia, en términos generales, a la estratificación social, de suerte que los grupos marginales por edad (muy jóvenes y viejos) y/o con menos recursos educativos consumen mucho menos información política. Preguntamos, «*con qué frecuencia sigue Ud. la actualidad política a través de la información de los periódicos?,... ¿y de la radio?..., ¿y de la televisión?*». Las respuestas que se ofrecieron fueron: «*Todos o casi todos los días/Una o dos veces a la semana/De vez en cuando/Nunca o casi nunca*». Las respuestas manifestaron, como era de esperar, que la televisión es el medio más utilizado para el seguimiento de la actualidad política. La mitad de los individuos consumen información política televisiva «*todos o casi todos los días*», mientras que para la prensa no llega a la tercera parte (28,9 por 100), y para la radio es la cuarta parte. La correlación más elevada entre seguimiento político según el tipo de medio se da entre la prensa y la radio. El seguimiento por la televisión correlaciona a un nivel más elevado con el seguimiento por la radio que por la prensa.

Actualmente en Galicia, el sexo es indiferente al consumo de información política televisiva. No hay asociación significativa entre las dos variables. La imagen del ama de casa «*devorando*» continuamente televisión puede ajustarse a la realidad respecto de otros géneros televisivos, pero no en lo que se refiere a la información política (3). En cambio, si se da una asociación significativa entre el sexo y el seguimiento de la actualidad política por la prensa (chi cuadrado de Pearson 54,9). Los hombres leen información política «*todos o casi todos los días*» mucho más que las mujeres (residuo ajustado corregido 7,0), y son muchos menos los que no leen información política «*nunca o casi nunca*» (-5,4). Lo mismo, aunque menos acentuadamente, se produce respecto de la radio (chi cuadrado 18,1). Los hombres escuchan información política por la radio «*todos o casi todos los días*» más que las mujeres (3,8), y son menos los que no la escuchan «*nunca o casi nunca*» (-3,1).

Pero podría tratarse de una asociación espuria. Las mujeres consumirían menos información política por la prensa y por la radio debido a que, en general, tienen un menor nivel de educación formal. Sin embargo, no es así. Controlado el nivel de es-

(3) La observación no es casual. En una intervención oral escuché al profesor Caciagli (cito de memoria, por lo que la referencia es una ilustración del caso, no una discusión) que ahora, gracias a la televisión, el colectivo de amas de casa estaba particularmente informado políticamente. Yo mismo, he cedido alguna vez a este tipo de sugerencias. Pero, en Galicia al menos, no es así.

tudios, en todos los grupos de estudios los hombres, de modo significativo, leen más información política «todos o casi todos los días» que las mujeres, y son menos, en todos los grupos de estudios, los que no leen información política en la prensa «nunca o casi nunca» (Y tampoco se descubre una tendencia consistente a la disminución de la pauta diferencial según se «sube» en el nivel de estudios). Para el consumo de información política por radio, como la asociación inicial con el sexo ya era muy débil, controlado el nivel de estudios los resultados no son significativos para ciertos grupos de estudios. Pero, para los que sí lo son (primarios incompletos, EGB o similares, y universitarios superiores) se confirma la pauta general: las mujeres (incluso a igualdad de estudios) consumen menos información política que los hombres. Por tanto, este indicador (como, presumo, cualquier otro) del interés por la política evidencia que éste no es función exclusiva, ni probablemente preferente, del nivel de educación formal. Hay alguna otra cosa (que presumiblemente tiene que ver con el tipo de inserción en el proceso de producción social).

El consumo de información política apenas se asocia con la edad. Para la radio y la televisión la asociación no es significativa. Para la prensa sí lo es, pero muy débil (r de Pearson, 07). Sin embargo, la comparación de las medias entre ambas variables permite algunas observaciones interesantes: el grupo de edad que frecuenta más la información política en la prensa es el de aquellos que tienen entre 36 y 45 años (2,27; 1 significa «todos o casi todos los días» y 4, «nunca o casi nunca»), seguido del grupo de edad entre 26 y 35 años (2,42). En sentido contrario, los mayores de 65 años son los que menos consumen información política por la prensa (2,88), seguidos por el grupo de edad de 18 a 25 años (2,82). La frecuencia de lectura de información política en la prensa describe una curva, sin inflexiones, que asciende desde el tramo de edad 18-25 años hasta el de 36-45, y desciende desde éste hasta el de más de 65 años. No hace falta mucha imaginación para constatar que el período de máximo interés por la lectura de información política coincide con los años de plenitud vital. El interés también es elevado en el período inmediatamente anterior, de particular relevancia para el éxito profesional y social. En la edad juvenil es mucho menor, y después de la plenitud va descendiendo progresivamente. Por raro que pueda parecer a primera vista, el interés por la lectura de la información política se constituye, así, en una suerte de metáfora del ciclo vital, constatación, de nuevo, perturbadora para las formulaciones tradicionales de la democracia. La enfática afirmación igualitaria no es fácil que impida que jóvenes y viejos (desde luego, «por su culpa») influyan menos de lo que les «correspondería» en las decisiones de gobierno.

La relación entre el consumo de información política y el nivel de estudios ya ha sido aludida a propósito de la relación entre el expresado consumo y el sexo. La correlación entre el nivel de estudios y la frecuencia del seguimiento de la actualidad política por televisión es tan débil que carece de relevancia. Para la radio es algo más alta (-,12) y más elevada para la prensa (-,29). El sentido de la correlación es siempre el mismo: a mayor nivel de estudios, mayor frecuencia del seguimiento de la actualidad política.

Por categorías, utilizando la técnica de residuos ajustados corregidos se constata que la gente sin estudios lee información política todos o casi todos los días, como era de esperar, en proporción muy inferior a la media del conjunto de la población (-4,7), incluso con menos periodicidad lee información política en proporciones significativamente inferiores a la media del conjunto de la población, y no lee «nunca o casi nunca» en proporción muy superior (9,5). También, la gente con sólo estudios primarios (inferiores a la EGB) lee información política «todos o casi todos los días» en proporción inferior a la media del conjunto de la población (-3,7) y no lee «nunca o casi nunca» en proporción muy superior (4,1). En cambio, la gente con estudios universitarios (medios o superiores) lee información política «todos o casi todos los días» en proporción muy superior a la media del conjunto de la población (5,5 y 7,4, respectivamente) y no la lee «nunca o casi nunca» en proporción muy inferior a la media (residuos ajustados corregidos: -6,2 y -4,2, respectivamente). Los grupos intermedios de estudios (EGB y bachillerato/formación profesional) ofrecen pocas diferencias respecto de la media.

Respecto de la radio, dado que la asociación entre nivel de estudios y consumo de información política es más débil, la distribución por categorías es menos expresiva. Ciertamente, aquellos con estudios universitarios siguen en mayor proporción la actualidad política por la radio «todos o casi todos los días» que la media del conjunto de la población (residuos ajustados corregidos: 2,7 para el grupo de estudios universitarios medios, y 4,8 para el de estudios universitarios superiores), y no oyen «nunca o casi nunca» información política por la radio en proporción inferior (-3,8, y -2,8, respectivamente). Y en el grupo de sin estudios son relativamente más los que no consumen información política nunca o casi nunca (2,9). Pero, los grupos intermedios de estudios no presentan diferencias relevantes a este propósito.

De un modo más sintético, si comparamos las medias, la media de seguimiento de la actualidad política por la prensa es, para el conjunto de la población, de 2,61 (1 significa «todos o casi todos los días»; y 4, «nunca o casi nunca»). Pues bien, los universitarios superiores presentan una media de 1,71 (además, la desviación típica en este grupo es la más pequeña, lo que indica que es el grupo con comportamiento más homogéneo a este propósito). Para los universitarios medios, la media es de 2,09. En el extremo contrario, la gente sin estudios presenta una media de 3,21, y los con sólo estudios primarios inferiores a la EGB, de 2,83. Los grupos de EGB y de bachillerato/formación profesional se apartan poco de la media del conjunto de la población.

La media de seguimiento de la información política por la radio para el conjunto de la población es de 2,67. También para este medio, los grupos de estudio que presentan un mayor consumo son los universitarios superiores, con una media de 2,07, seguidos por los universitarios medios, 2,39. En el extremo opuesto, la gente sin estudios es la que menos consume información política por la radio, 2,83, seguida por el grupo de bachillerato/formación profesional, 2,82. Los otros grupos de estudios no se apartan mucho de la media del conjunto de la población.

La media de seguimiento de la actualidad política por televisión para el conjunto de la población es de 2,03. Los universitarios superiores, también respecto de este medio, son los que consumen más información política, 1,81 (además, con la desviación típica más pequeña), seguidos de los universitarios medios, 1,92. El menor consumo de información política por televisión corresponde al grupo de sin estudios, 2,16. Los otros grupos de estudios se apartan poco de la media del conjunto de la población.

En resumen, la frecuencia del consumo de información política se asocia al nivel de estudios. A mayor nivel de estudios, mayor frecuencia de consumo de información política. Esta asociación es muy caracterizada para la prensa, menos para la radio, y muy poco para la televisión. Por tanto en la medida en que el consumo de información política sea un indicador del interés por la política, éste se asocia positivamente con el mayor nivel de estudios. Y en la medida en que se presume que la información de prensa implica una mayor elaboración racional, el factor del nivel de estudios cobra importancia crucial como determinante del interés por la política.

REFERENCIAS

- ALMOND, GABRIEL A. y VERBA, S. (1963): *The civic culture*, Princeton University Press.
- BELL, DANIEL (1964): *El fin de las ideologías*, Editorial Tecnos, Madrid (trad. de *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*, Free Press, Glencoe, 1960).
- BOLLEN, K. A. (1979): «Political democracy and the Timing of Development», *American Sociological Review*, vol. 44, agosto, págs. 572-587.
- BOLLEN, K. A. (1980): «Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy», *American Sociological Review*, vol. 45, junio, págs. 370-390.
- CASTILLO, PILAR DEL Y CRESPO, I. (eds.) (1997): *Cultura política*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- DAHL, R. A. (1990): *La Poliarquía*, Tecnos, Madrid (trad. de *Polyarchy*, Yale University Press, New Haven, 1971).
- DETH, J. W. VAN (1990): «Interests in politics», en M. K. JENNINGS, J. W. VAN DETH *et al.*, *Continuities in political action. A longitudinal study of political orientations*, W. de Gruyter, Berlín.
- DEUTSCH, K. W. (1961): «Social Mobilization and Political Development», *American Political Science Review*, vol. 55, págs. 493-514.
- EASTON, DAVID (1963): *The Political System*, A.A. Knopf, New York.
- FONT, J. (1995): «Manuel Justel. In memoriam. La abstención electoral en España: certezas e interrogantes», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, núms. 71-72, Madrid, julio/diciembre, págs. 11-37.
- FUCHS, D.; GUIDOROSI, G. y SVENSSON, PALLE (1995): «Support for Democratic System», en H. D. KLINGEMANN y D. FUCHS (eds.): *Citizens and the State*, Oxford University Press.
- FUCHS, D. y KLINGEMANN, H. D. (1990): «The left-right schema», en M. K. JENNINGS, J. W. VAN DETH *et al.*: *Continuities in political action. A longitudinal study of political orientations in three western democracies*, W de Gruyter, Berlín.

- HUME, DAVID (1902): *Enquiries concerning the human understanding and concerning the principles of morals*, Reimpresión de la edición póstuma de 1977; ed. L. A. SELBY-BIGGE, 2.ª edición, Clarendon Press, Oxford.
- INGLEHART, R. (1988): «The Renaissance of Political Culture», *American Political Science Review*, vol. 82, núm. 4, diciembre, págs. 1203-1230.
- INGLEHART, R. (1991): *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid (trad. de *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, Princeton University Press, 1990).
- INGLEHART, R. (1997): «Postmaterialist Values and the Erosion of Institutional Authority», en J. S. NYE, Jr., P. D. ZELIKOV y D. C. KING (eds.): *Why People Don't Trust Government*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- INGLEHART, R. (1998): *Modernización y posmodernización*, Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI de España Editores, Madrid (trad. de *Modernization and Postmodernization*, Princeton University Press, 1997).
- JUSTEL, MANUEL (1992): «Edad y cultura política», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, núm. 58, Madrid, abril/junio, págs. 57-96.
- JUSTEL, MANUEL (1995): *La abstención electoral en España, 1977-1993*, Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI de España Editores, Madrid.
- LIPSET, S. M. (1959): «Some Social Requisites of Democracy: Economic development and political legitimacy», *American Political Science Review*, vol. 53, págs. 69-105.
- LIPSET, S. M. (1960): *Political Man*, Garden City, N.Y., Doubleday.
- MONTERO, JOSÉ RAMÓN, GUNTHER, R. y TORCAL, MARIANO (1997): «Democracy in Spain: Legitimacy, Discontent, and Desaffection», Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (Working paper 100), Madrid.
- PUTNAM, R. D. (1993) (con la colaboración de R. LEONARDI y R. Y. NANETTI): *Making Democracy Work*, Princeton University Press.
- ROSTOW, W. W. (1961): *The Stages of Economic Growth*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WEIL, F. F. (1989): «The sources and structure of legitimation in western democracies», *American Sociological Review*, vol. 54, núm. 5, págs. 682-706.

